

COLOMBIA 2020: LA MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO OPORTUNIDAD Y REFLEJO DEL CAMBIO

Érika Rodríguez Pinzón

9 de enero de 2019

Según las encuestas realizadas dos días después de que el 21 de noviembre de 2019 se declarara el Paro Nacional y se iniciaran las movilizaciones, el 70% de los colombianos se mostraba favorable a las protestas (Invamer, 2019a). En la misma encuesta, la aprobación del presidente solo llegaba al 30%.

El descontento en Colombia no es nuevo. Es una tendencia en aumento en los últimos seis años; es decir, cuando el país pasó por otra jornada de paro masivo durante el gobierno del presidente Santos, en ese caso protagonizada por los campesinos. Sin embargo, el clima de pesimismo entre los ciudadanos se ha extendido a muchas más cuestiones, como el desempleo, la inseguridad, las perspectivas económicas e, incluso, las relaciones internacionales.

Siguiendo con los resultados de las encuestas, estas evidencian que el desempleo y la situación económica, en desaceleración en toda América Latina, agudizan la situación de descontento y las bajas expectativas ante al futuro (LAPOP, 2019). Al escena-

rio económico se suma la situación misma de la acción del gobierno. En los primeros días de noviembre de 2019 el ministro de Defensa de Colombia se vio obligado a renunciar a su cargo, después de que se comprobaba que hasta 18 niños —víctimas de reclutamiento forzado— murieron en una acción del Ejército Nacional contra la disidencia guerrillera que los había reclutado. Asimismo, hubo problemas con la elección del exfiscal, que renunció en mayo por las sospechas de su vinculación con el caso Odebrecht.

Así, la popularidad del presidente Iván Duque no ha remontado desde que fuera elegido en 2018, sino que va menguando y la aprobación de su gestión ha pasado del 47%, poco después de su elección, a un escaso 26% en noviembre de 2019 (Invamer, 2019b). A este escueto apoyo popular, se le unen las dificultades de gobernabilidad en un país con un legislativo muy fragmentado, en el cual toda medida requiere de la construcción de una arquitectura de apoyos compleja, que nunca es gratuita. De cualquier forma, la mayor dificul-

tad del presidente es lidiar con la presión que ejercen sobre él y su partido la herencia y el peso del ex-presidente Álvaro Uribe. En este sentido, el descontento popular no solo recae en Duque, sino especialmente en la figura de Uribe.

La sociedad colombiana está viviendo profundas transformaciones, liderazgos emergentes, reconocimientos intercolectivos y una ampliación de la agenda del debate público y de criterios en la valoración de sus líderes. Aun así, es difícil saber si las protestas conseguirán alguno de sus objetivos, aunque está claro que se ha producido un profundo cambio en la sociedad.

El origen del Paro

Como se ha señalado, en 2013 tuvo lugar un gran paro campesino que obligó al gobierno a negociar para dar respuesta a las demandas del históricamente vapuleado sector minifundista agrario. Tres años después, se firmó el Acuerdo de Paz Definitivo con las FARC, que —además de indicar el camino para la reincorporación de la guerrilla y sus miembros a la vida política y civil— incluía una importante serie de medidas para superar las brechas históricas, sociales y económicas en las zonas agrarias afectadas por la presencia del conflicto, así como para garantizar la verdad, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

El presidente Duque, como representante del Centro Democrático, ha tenido una posición ambigua en la implementación del postconflicto. En línea con su partido, ha criticado duramente aspectos fundamentales del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz. En otros aspectos, ha gestionado una implementación lenta y débilmente dotada de recursos, como en el caso de los Planes de Desarrollo Territorial. En materia de reincorporación ha cumplido y ha aumentado el periodo de cobertura, pero ha demostrado poca capacidad para garantizar la vida e integridad de los y las reincorporadas y sus familias.

Algo similar ha ocurrido con los líderes y lideresas sociales y ambientales, sometidos a una gravísima amenaza por parte de disidencias, grupos paramilitares y criminales, y cárteles. Según datos de Indepaz (2019), 702 líderes sociales y 135 excombatientes habrían sido asesinados desde la firma del Acuerdo hasta mayo de 2019, en un goteo de asesinatos que no cesa.

En consecuencia, hay una percepción generalizada de que el gobierno no tiene voluntad de cumplir con la implementación total del Acuerdo y, dadas las expectativas generadas por la paz, este se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para la movilización.

Además de la implementación, hay otras dos claras fuentes de movilización. Una es el descontento de sectores específicos, que sufren históricos déficit de recursos, y que han terminado por agruparse y convocar al Paro conjuntamente. Uno de los más potentes, por su capacidad de movilización, ha sido el de los estudiantes universitarios. Tras una amplia movilización en diciembre de 2017, el presidente se comprometió a paliar el déficit de las universidades públicas aportando 4,5 billones de pesos (unos 1.200 millones de euros), lo que dio gran poder al movimiento estudiantil.

Después vino la movilización de la “Minga Indígena” del Cauca, ante la cual el presidente también respondió con un conjunto de promesas para aplacar la protesta. Sin embargo, no se trata de prometer para tranquilizar los ánimos, sino de cumplir con las expectativas. El gran problema del presidente Duque es que promete, sin poder o tener verdadero margen de maniobra para cumplir, y así solo logra alargar un poco más el plazo hasta la próxima protesta. Además, poco a poco ha ido perdiendo su capital para la negociación (Gómez Buendía, 2019).

La segunda fuente, tiene que ver con la gestión del presidente en el marco de la desaceleración económica regional, la disminución de las expectativas de crecimiento nacional y el aumento sostenido del desempleo. A su vez, Duque también representa

una tradición neoliberal que cree en el crecimiento “por derrame”. En general, sus medidas tienden a favorecer a las empresas y a los grandes capitales, a la espera de que estas generen por sí solas bienestar social.

El Paro convocado por diferentes gremios y organizaciones aunaba el descontento de la ciudadanía frente a las medidas en materia fiscal, reforma laboral y venta del patrimonio del Estado, el conocido como “paquetazo de Duque”. El gobierno buscaba activar mecanismos para movilizar la economía, puesto que —si bien Colombia es uno de los países que mantiene un crecimiento positivo en la región— ha comenzado a perder fuelle. La media de las previsiones de los expertos apunta a un crecimiento del 3,14% en 2020, lejos del 4% que esperaba el gobierno. A su vez, la inflación estaba a finales de 2019 en el límite alto previsto por el Banco de la República, en un 3,48%, y lo que más preocupa —el desempleo— alcanzó el 10,4% (Revista Semana, 2019).

La respuesta gubernamental

En el análisis de la respuesta gubernamental al Paro debe diferenciarse la estrategia previa y la posterior. Antes de su inicio, el gobierno intentó evitar que se tornara en un evento masivo. Para ello diseñó una estrategia de desmovilización que tenía dos mensajes: el primero era desacreditar las demandas ante las medidas anunciadas. Aunque la mayoría aún no

estaban aprobadas, ya se habían hecho públicas —algunas como “globos sonda” y otras más formalmente—; sin embargo, todas ellas habían creado una importante alarma social. Entre las medidas más impopulares estaban la venta de activos nacionales; la reforma tributaria, que beneficiaría a las grandes empresas e impondría costes a los trabajadores por cuenta propia o “autónomos”, y la reforma laboral, que flexibilizaría aún más el mercado laboral al proponer, por ejemplo, una disminución del salario mínimo para los jóvenes.

Además de desmentir las medidas, el gobierno se centró en crear una campaña de miedo que intentaba desincentivar que más personas se unieran a la movilización. La creación de una sensación de inseguridad se valió de argumentos como la conspiración de Venezuela, para infiltrar las marchas y desestabilizar al país, o de las imágenes de los desmanes y la violencia que se produjeron en Ecuador y Chile. El gobierno mostró tal miedo ante la protesta que podría decirse que terminó por convertirla en el principal tema de su agenda, dándola a conocer más allá de lo que sus promotores habían hecho.

Lo cierto es que ni la negación de las medidas ni la estrategia del miedo consiguieron desmovilizar la protesta, y esta se amplió a más sectores y a una mayor participación ciudadana. Además, adquirió un tono lúdico, que en cierta forma rebajó el coste de

participación y amplió su base. Al contrario de lo que podría esperarse en un país con altos índices de violencia, las movilizaciones han sido quizá las más pacíficas de las que se han producido en la región, y eso a pesar de la acción policial desmedida del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que se cobró la vida de un joven de 18 años.

A partir del 21 de noviembre, la estrategia del gobierno incorporó otros dos componentes. Por un lado, el enfrentamiento frontal basado en el “control” del orden público. Por otro, la falta de voluntad, desidia y menosprecio a la negociación con los sectores convocantes. Así, el gobierno se ha decantado por convocar una “conversación nacional” intentando disminuir el papel del Comité Nacional del Paro.

El presidente Duque pasó la primera jornada del Paro en un gabinete de crisis rodeado de militares uniformados, una imagen que se unía a las que ya se han visto en otros países de la región y que han avivado la discusión sobre el papel del Ejército en América Latina. La militarización en Colombia no es nueva ni excepcional, puesto que es un país en el que el Ejército —por cuenta del combate del narcotráfico y el conflicto armado— ha desempeñado un papel muy activo, incluso y especialmente como extensión del Estado en zonas donde este no opera.

Sin embargo, pese a que antes del Paro ya se había producido la militarización de Bogotá, el control de las manifestaciones ha estado en manos de la Policía y del citado Esmad, que es parte de dicha fuerza. Su acción ha sido violenta y, en especial, preocupan algunas medidas que tomó, claramente contrarias al Estado de derecho, como la detención ilegal en vehículos no autorizados, el control aleatorio de personas para revisar el contenido de sus móviles y de sus redes sociales, el uso de munición inapropiada para el control de multitudes, etc. Estas acciones, en lugar de sofocar las protestas, han puesto a Colombia bajo el foco de organizaciones como Human Rights Watch y han impulsado una nueva demanda social: el desmantelamiento del Esmad.

Otro hecho que no puede dejar de señalarse es la creación de una campaña de terror en las redes, que mantuvo a Bogotá y a Cali literalmente en vilo durante la noche del 22 de noviembre, dado que alertaba sobre saqueos que habrían estado produciéndose en varias urbanizaciones. Los ciudadanos se armaron con lo que tenían a mano y pasaron la noche dispuestos a defender sus casas, mientras corrían rumores sobre la cercanía de los vándalos, o de ataques a determinados lugares. El alcalde y el director de la Policía desmintieron que hubiese habido actos vandálicos. No obstante, los rumores desatados, en parte por miembros del

Centro Democrático, echaban la culpa de la supuesta ola de vandalismo a los venezolanos, en una peligrosa utilización del incipiente componente xenófobo por parte de la derecha más radical.

La debilidad del presidente

Además del énfasis puesto en el control de la seguridad, y en la negación de las razones que motivaron la convocatoria del Paro, el presidente ha desarrollado una estrategia poco clara y cuestionable ante las demandas sociales. En primer lugar, convocó a los empresarios y comerciantes para subrayar el daño que las protestas podían producir sobre la economía, un gesto que no fue bien recibido por la ciudadanía movilizada. Después anunció que el diálogo con el Comité del Paro tomaría varios meses, y dilató su puesta en marcha una semana más tarde de lo previsto.

El gobierno no parecía apresurado por iniciar una negociación para la suspensión de las movilizaciones y lanzó mensajes contradictorios. Así, por ejemplo, anunció la suspensión de las reformas pensional y laboral —las mismas que había negado que existieran— y adoptó varias medidas para disimular los efectos de la reforma tributaria en curso en el Congreso: tres días sin IVA al año, descuento del IVA a los más pobres y la devolución del 120% de las contribuciones parafiscales a los empresarios que contratasen jóvenes.

Sin embargo, la reforma tributaria cursada en el legislativo revivía la llamada Ley de Financiamiento, presentada en 2018, que la Corte Constitucional declaró inexecutable por defectos de forma. De este modo, a la vez que se desarrollaban las movilizaciones —y sin haberse sentado en firme las bases para el diálogo—, el Congreso aprobó el 20 de diciembre de 2019 la Ley de Crecimiento, que conserva muchas de las medidas de la ley bloqueada y son objeto de conflicto.

El fondo de la Ley de Crecimiento responde al interés del gobierno en generar avances a partir de preceptos de la economía neoliberal. En ese sentido, la reforma presenta dos grandes problemas: el primero es la pérdida de ingresos para el Estado, debido a las numerosas exenciones fiscales que plantea, que pueden suponer una merma de hasta un 6,6% del PIB (Fedesarrollo, 2019). El Estado va a ver disminuidos sus recursos, lo que abocará a un recorte del gasto público o a la realización de otra reforma sobre un estatuto fiscal lleno de agujeros (Fergusson, 2019). Desde luego, si los ingresos del Estado van a reducirse, o están enteramente comprometidos, queda poco margen para trasladar promesas a los manifestantes. Esta falta de financiación también puede repercutir sobre la calificación que otorgan las agencias de riesgo, y afectar en consecuencia al objetivo del gobierno de mejorar la inversión y sostener el

crecimiento económico. Los grandes favorecidos por la reforma son los empresarios y, por ese motivo, han presionado para que esta saliera adelante, pese a la inestabilidad social y las dificultades de gobernabilidad que suscita.

En segundo lugar, nada garantiza que la reforma genere crecimiento, tal como afirma el gobierno. Para que las descargas fiscales a las empresas surtieran efecto, harían falta condiciones dinámicas de crecimiento de la demanda y un aumento de la capacidad productiva que no se dan. La economía está estancada y la demanda no crece, a lo que se suma la contracción del gasto público. De hecho, como dato relevante, Kalmanovitz (2019) afirma que el país consiguió un crecimiento del 3% en 2019 gracias a las remesas. Estas representan el 2,3% del PIB y explican el repunte en el consumo de los hogares, consecuencia de los buenos resultados de la tasa de paro en EE.UU., pero no dan más de sí para movilizar en mayor medida el consumo.

El crecimiento “por derrame” no está garantizado y, como es bien sabido, tampoco incidiría en la distribución de la riqueza, que es justo el gran problema de Colombia. En el país el quintil más rico, el 20% de la población, posee el 55,7% del ingreso nacional, mientras que el resto se reparte entre la población restante, y a los más pobres apenas les toca el 3,9% del ingreso total. Se trata de una si-

tuación que no ha variado en las últimas décadas, más aún: esta estructura de la distribución de la riqueza espolea el descontento de los manifestantes, la mayoría de los cuales pertenece a las clases medias, ve afectada sus expectativas y soporta buena parte de la carga tributaria. Son los perdedores de la reforma, y los que pagan más impuestos sin beneficiarse, a cambio, de mejores políticas públicas. De hecho, las personas en hogares de mayor ingreso urbano son las más susceptibles de valorar negativamente a Duque. Algo que, como apunta Jorge Galindo (2019), contrasta con el patrón de rechazo al presidente Sebastián Piñera en Chile, donde —de acuerdo con el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2019)— la población con rentas bajas es la más crítica con la gestión del ejecutivo.

Queda la sensación de que el nuevo proyecto de crecimiento ha pretendido ofrecer algunas respuestas ante la protesta social, conciliándolas con el espíritu de la Ley de Financiamiento, de reducción de las altas cargas impositivas a las empresas, y generar por esa vía mayores ingresos para el fisco. Sin embargo, esta mezcla, hecha de elementos de realidades políticas diferentes, no parece haber quedado bien (Fedesarrollo, 2019).

Los líderes del Paro y las demandas sociales

Mientras el gobierno parece sorprendido de que el descontento y las de-

mandas sociales tomen la calle —y argumenta que solo las urnas representan la participación legítima—, el Comité del Paro ha creado una suerte de coalición de intereses en la que confluyen varios actores sociales con muy diversas demandas.

El estilo de la protesta refleja una evolución de las marchas estudiantiles que se vienen produciendo desde 2011, a las que se ha incorporado, como parte fundamental, el sector cultural y artístico (clases al parque, conciertos, títeres en marcha, etc.). Esto ha impreso a las protestas una impronta que ha permitido que, pese a la campaña de miedo y a las medidas de control violento, más personas se hayan involucrado en la movilización, haciéndola más transversal. Incluso, por vez primera, han tenido lugar numerosos cacerolazos. Lo que todo esto ha puesto de relieve es un importante cambio acerca del tratamiento de los problemas del país, que ya no se consideran producto exclusivo del conflicto armado, sino también del modelo económico y del tipo de régimen político que se ha construido hasta el momento.

El descontento en Colombia no es coyuntural, pero sí lo es la reducida capacidad del presidente para desviar los problemas, o frenarlos, antes de que se transformen en movilizaciones. Duque tiene una escasa disposición a la negociación, soporta altos costes para mantener la gobernabilidad y ha perdido el argumento que

recurre al conflicto para explicar los males del país.

Este escenario, en el que se combinan la transversalidad de la movilización y la construcción de una agenda de “conversación nacional”, ha traído consigo dos novedades más. En primer lugar, la ampliación de los liderazgos sociales y de su arraigo ideológico, más allá de la política tradicional. Por ejemplo, han emergido como líderes de la opinión crítica al gobierno los rectores de dos universidades privadas de élite. Asimismo, numerosos artistas se han convertido en creadores de opinión y se han atrevido a criticar abiertamente al gobierno, un hecho poco común hasta ahora.

Es importante destacar que la desaparición de la guerrilla más poderosa del país ha liberado en cierta forma el espacio para la crítica y la reflexión en el centro y el centro-izquierda, anteriormente susceptible de cooptación o limitación por la lógica militarista y violenta. Históricamente, la guerrilla ha sido en Colombia un factor de debilitamiento de la movilización obrera, estudiantil y sindical y, en general, de la izquierda. Hoy hay más personas dispuestas a defender planteamientos críticos y progresistas gracias a la disminución de la probabilidad de ser tachadas de guerrilleros.

La segunda novedad es el encuentro entre el país rural y el urbano. La

llegada a la ciudad de la guardia indígena y cimarrona (afrocolombiana)—recibida con homenajes y el reconocimiento a quienes han sufrido tanto el conflicto como la exclusión social— ha simbolizado este encuentro. Colombia es un país que, desde que se promulgara la Constitución de 1991, ha hecho un gran esfuerzo para reconocer su diversidad cultural y racial. Esto se ha materializado en la estructura legislativa y en el establecimiento de la jurisdicción indígena, y se está afianzando en la construcción identitaria de la sociedad. Se trata de un paso realmente importante, habida cuenta de la enorme fractura de vivencias que dejó el conflicto entre el país urbano y el periférico (afro e indígena) y, en especial, ante la acción paramilitar, muchas veces justificada desde la ciudad para llevar el orden a las regiones apartadas.

Antes de cerrar este apartado, es preciso señalar que la convocatoria del Paro no solo ha reflejado la demanda de soluciones, sino que también ha materializado la desconfianza que hay entre representados y representantes, y el descontento de las clases medias por la ruptura de sus expectativas, en un marco de desigualdad social e ineficacia de las políticas públicas. Sin embargo, a diferencia de otros escenarios latinoamericanos, no se ha pedido la salida del presidente. La sociedad civil colombiana comprende que la movilización es una acción necesaria para presionar en algunos momentos a la institucio-

nalidad, pero juega bajo las reglas constitucionales y hay una tendencia a buscar salidas cooperativas (Jiménez, 2019).

En esta búsqueda de salidas, el Comité del Paro presentó al principio 13 demandas, entre ellas, la de desmontar el Esmad; pero, ante la negativa del gobierno a discutir este punto, se levantó de la mesa. El Paro continuó sin perder fuerza, agrupando cada vez más intereses, lo que llevó a que las 13 demandas pasasen a 104. Evidentemente, tal cantidad y diversidad de medidas dificulta cualquier negociación. Además, los puntos contenidos en el pliego no son el único objeto de discordia. Tampoco se ha logrado un acuerdo sobre el mecanismo, los temas, la modalidad y la naturaleza misma de la “conversación”. Bien es cierto que todas las demandas son legítimas y merecedoras de una discusión profunda con las instituciones. No obstante, algunas de ellas cuestionan atributos del Estado, o no pueden realizarse sin determinados cursos legales, lo que puede convertirlas en un escollo que impida sacar adelante otras más viables e incluso urgentes.

De cualquier forma, la cantidad de propuestas presentadas denota la necesidad de abrir más espacios de diálogo en Colombia, de modo que el Paro se ha convertido en una oportunidad para aflorar muchos aspectos que van a llenar la agenda nacional en los próximos años. Hay un des-

pertar de la participación, pero también una clara ampliación de la agenda pública en un país que se está transformando rápida y radicalmente.

Como se ha avanzado, el gobierno ha creado una “gran conversación nacional” para encauzar el proceso de diálogo, para la cual se nombraron moderadores independientes de reconocido prestigio y se estableció una primera agenda de encuentros entre los diversos actores¹. Sin embargo, la mesa se vio interrumpida por varios desacuerdos y el impacto de la muerte de un joven de 18 años a manos del Esmad.

Tras el parón de las fiestas navideñas, durante las cuales se mantuvieron los cacerolazos, se retomó la negociación y prosiguió la presión en la calle. Sin embargo, la falta de concreción del gobierno, sumada a la ampliación del pliego de demandas, hace que sea difícil prever el resultado de las negociaciones entre el gobierno y el Comité del Paro. Dependiendo de la actitud de las partes y de su fuerza relativa, se pueden presentar diferentes escenarios, tal como plantea León Valencia (2019).

El primero, optimista, estima que la protesta continuará con fuerza, pero que el gobierno, el Comité del Paro y la variedad de actores sociales implicados en la protesta llegarán a un

¹ Para participar en la definición de su agenda, se puede acceder a:
<http://conversacionnacional.gov.co>.

acuerdo nacional y así el país entrará en un camino de reformas liderado por Duque. Aunque se trata un escenario muy poco probable, no es descartable. El segundo escenario, pesimista, vaticina que la maniobra de la conversación nacional, sin negociación, dará resultados al gobierno y la protesta se apagará sin mayores cambios. Finalmente, un tercer escenario, esperanzador, prevé que las protestas continuarán, no se logrará un acuerdo nacional y se buscarán otros cauces para el cambio y las reformas. En este sentido, el gobierno entraría en una profunda crisis e incluso el presidente podría plantearse la renuncia.

Los desafíos de Colombia en 2020

Finalmente, hay que analizar los desafíos más generales que afronta Colombia a la luz no solo del Paro, sino también de sus necesidades y de la experiencia de los últimos dos meses. Según se ha dicho, las medidas económicas pueden dar lugar a una contracción del gasto público en un momento en el que el país enfrenta enormes retos. Uno de ellos es la migración venezolana. Se espera que el flujo de personas continúe creciendo a lo largo de 2020. A finales de 2019 se contaban 1,5 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los cuales 300.000 estaban en Bogotá. En 2020 los migrantes podrían llegar a los cuatro millones. Dado que de por sí Colombia acusa importantes carencias sociales hacia su población, la atención humanitaria

hacia los migrantes implica un reto adicional. Sin embargo, también supone una oportunidad para acoger a jóvenes con capacidad laboral, que pueden contribuir a mejorar la economía, la sostenibilidad del sistema pensional y la productividad (Reina, Mesa y Ramírez, 2018).

Lo cierto es que el proceso migratorio es un fenómeno de largo plazo y debe entenderse como una transformación de la estructura social. En ese sentido, su gestión no solo requiere de voluntad política, sino de políticas públicas que integran a los inmigrantes y que, al mismo tiempo, eviten la generación de xenofobia y aporofobia ante el creciente colectivo de venezolanos. Las muestras de temor y rechazo que se han presentado durante los primeros días del Paro son un síntoma preocupante ante un desafío social que debe tratarse a la par, y de forma equitativa, con el resto de las demandas sociales.

En relación con estas demandas, hay que atender el problema histórico de la exclusión social, de la que se aprovechan de forma oportunista los grupos que actúan en situaciones de inestabilidad, al protagonizar actos vandálicos en el marco de las protestas. Una de sus muchas consecuencias es que ese importante porcentaje de población excluida ve bloqueadas sus expectativas de mejora y tiende a resultar criminalizado.

Revertir las desigualdades no es solo una cuestión del gobierno —que, a tenor de sus últimas decisiones, no parece prioritaria, al menos por sus políticas de progresividad fiscal o redistribución—, sino que también implica un compromiso social de renuncia a determinados privilegios de *statu quo* y de clase. La igualdad es una apuesta social y requiere hacer sacrificios materiales, tributarios y simbólicos, por parte de los sectores medios y altos.

Por otro lado, se presenta el reto de enfrentar el aumento de la inseguridad causado por la presencia de bandas criminales y disidencias de la guerrilla, que han marcado de forma trágica el final de 2019 con asesinatos a ambientalistas, promotores culturales y líderes sociales, e incluso a un fiscal, mientras los primeros resultados de la Justicia Especial para la Paz han llevado a la apertura de fosas comunes que reviven el horror de los “falsos positivos”. Finalmente, la presencia de sectores políticos cada vez más extremistas con agendas profundamente reaccionarias —como los que representan al voto evangélico o los sectores radicales del Centro Democrático—, supone también un obstáculo para el diálogo.

Con todo, según las encuestas, los resultados de las últimas elecciones locales y las manifestaciones del Paro nacional, es obvio que la principal figura del conservadurismo de derechas, Álvaro Uribe, ha sufrido

un gran desgaste. El “caudillo” político, que ha estado en la primera línea de la política colombiana durante al menos las últimas dos décadas, parece estar perdiendo su capital político. La desaparición o pérdida radical de su popularidad representa una oportunidad de cambio para la reconstrucción de los liderazgos y de los clivajes políticos, muy polarizados.

En suma, 2020 será un año decisivo para Colombia: a pesar de la inestabilidad, hay una oportunidad para que se produzcan y consoliden cambios indispensables en el país. El gobierno tendría que obrar con una apertura de miras que hasta el momento ha desdeñado. Los colectivos sociales que han alentado las protestas también tienen la responsabilidad, aun manteniendo la movilización, de abrirse a nuevas oportunidades para llegar a resultados, evitando enrocarse en opciones de suma cero, aunque en algunos casos sea difícil. Es necesario contar con una estrategia de negociación y mantener la legitimidad de los representantes para que, a pesar de su diversidad, la protesta ciudadana consiga victorias progresivas y se construya un camino de transformación política y social.

Érika Rodríguez Pinzón es doctora en Relaciones Internacionales, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Referencias bibliográficas

- CASTRO TORRES, H. (2019): “El Paro Nacional, ¿Cómo serán las negociaciones?”, *Razón Pública* (2/12/2019). Disponible en: <https://razonpublica.com/el-paro-nacional-como-seran-las-negociaciones/>.
- CEPAL (2019): *Panorama Social de América Latina 2019*, Santiago, Naciones Unidas.
- FEDESARROLLO (2019): “La Ley de Crecimiento en problemas”, *El Colombiano* (13/12/2019) Disponible en: <https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimple/elcolombianocom13diciembre2019.pdf>.
- FERGUSON, L. (2019): “Se requiere no solo dar regalos sino buscar nuevos recursos”, Bogotá, Universidad de los Andes (04/12/2019). Disponible en: <https://uniandes.edu.co/es/noticias/desarrollo-regional/se-requiere-no-solo-dar-regalos-sino-buscar-nuevos-recursos>.
- GALINDO, J. (2019): “¿Por qué se encendió Colombia?”, *El País* (23/12/2019). Disponible en: <https://elpais.com/internacion> al/2019/11/22/america/1574397449_439486.html.
- GÓMEZ BUENDÍA, H. (2019): “El Paro Nacional o la batalla del relato”, *Razón Pública* (09/12/2019). Disponible en: <https://razonpublica.com/el-paro-nacional-o-la-batalla-del-relato/>.
- INDEPAZ (2019): Informe: “Líderes asesinados y defensores de DDHH asesinados a julio de 2019” (29/07/2019). Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/informe-lideres-y-defensores-de-ddhh-asesinados-al-26-de-julio-de-2019/>.
- INVAMER (2019a): *Gallup Poll: Encuesta de opinión - Colombia #133* (27/11/2019).
- (2019b): *Gallup Poll: Encuesta de opinión - Colombia #134* (23/12/2019).
- JIMÉNEZ, M. (2019): “El año que la política volvió a la calle”, *Razón Pública* (16/12/2019). Disponible en: <https://razonpublica.com/el-ano-en-el-que-la-politica-olvio-a-la-calle/>.
- KALMANOVITZ, S. (2019): “Las demandas sociales y la tributación”, *El Espectador* (02/12/2019). Disponible en:

<https://www.elespectador.com/opinion/las-demandas-sociales-y-la-tributacion-columna-893756>.

22/un-pais-en-una-agitada-transicion-politica/.

LAPOPOP (2019): *Barómetro de las Américas*, Nashville, Vanderbilt University. Disponible en:
<https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/acerca-americasbarometer.php>.

REINA, M., MESA, C. A. y RAMÍREZ, T. (2018): “Elementos para una política pública frente a la crisis de Venezuela”, *Cuadernos de Fedesarrollo* n° 69, Bogotá, Fedesarrollo. Disponible en:
<https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3716>

REVISTA SEMANA (2019): “¿Cuánto crecerá la economía en el 2020? Esto dicen los expertos” (14/12/2019). Disponible en:
<https://www.semana.com/economia/articulo/proyecciones-de-crecimiento-economico-en-colombia-para-el-2020-segun-expertos/644719>.

VALENCIA, L. (2019): “Un país en una agitada transición política”, *Pares* (22/12/2019). Disponible en:
<https://pares.com.co/2019/12/>

Fundación Carolina, enero 2020

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
[@Red_Carolina](https://twitter.com/Red_Carolina)

ISSN: 2695-4362
https://doi.org/10.33960/AC_01.2020

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)